NOMBRE DE LA VÍA	CLASIFICACIÓN
VÍA GONZÁLEZ - ESCUELA ROMINGUIRA	TERCER ORDEN
VÍA LANCHEROS - MIGUEL ARIAS PICASAUQUE	TERCER ORDEN
VÍA MEDINA - VÍA LÓPEZ	TERCER ORDEN
VÍA MARTÍNEZ-VÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	TERCER ORDEN
VÍA LAS PANELAS - POTRERILLO	TERCER ORDEN
VÍA LA CRUZ DE CHIVATA - LAS PANELAS	TERCER ORDEN
ALTO BLANCO - LA CRUZ DE CHIVATA	TERCER ORDEN
VÍA LA CRUZ - EL CRUCE	TERCER ORDEN
VÍA NOVA - CRUZ ARRIBA	TERCER ORDEN
VÍA TIBATÁ - CASA FLIA. GONZÁLEZ	TERCER ORDEN
VÍA PACASUCA - CASA FLIA. PICACHICA	TERCER ORDEN
VÍA MEDINA - CARLOS JULIO PACASUCA	TERCER ORDEN
LA GOBERNACIÓN - VÍA ROSA REYES	TERCER ORDEN
COLEGIO OXFORD - LA CRUZ DE CHIVATA	TERCER ORDEN
VÍA FROILAN CAMPOS - EMPRESA T CHINT	TERCER ORDEN
VÍA CAMPOS - CAS FLIA. ÁLVAREZ	TERCER ORDEN
VÍA LAS MARRANERAS- LAS LADRILLERAS	TERCER ORDEN
VÍA YANQUEN - EL BOSQUE	TERCER ORDEN

Artículo 2°. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente resolución.

Artículo 3°. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4°. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Soracá del Departamento de Boyacá, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de acuerdo con lo consagrado en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 o cualquiera que la modifique o sustituya.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese y cúmplase.

La Directora de Infraestructura,

Alejandra Quintero Lopera.

(C. F.).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2595 DE 2022

(diciembre 23)

por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios para la presente vigencia fiscal.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en la Ley 4ª de 1992, y

DECRETA:

Artículo 1°. *Pago de compensatorios en dinero.* Las entidades públicas podrán reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que se hubieren causado hasta la fecha de publicación del presente Decreto, a favor de cada empleado público, siempre que exista disponibilidad presupuestal y no se afecten los recursos para el pago de horas extras que se vayan a causar en el resto de la presente vigencia.

Artículo 2°. *Vigencia y Derogatoria.* El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 1777 de 2021 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2022.

GUSTAVO PETRO URREGO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Antonio Ocampo Gaviria.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

César Augusto Manrique Soacha.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 90523 DE 2022

(diciembre 22)

por la cual se establecen los ingresos operacionales y los activos totales que se tendrán en cuenta para informar una operación de integración durante el año 2023.

El Superintendente de Industria y Comercio (e), en ejercicio de sus facultades legales, y en especial la consagrada en el párrafo primero del artículo 4° de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 333 de la Constitución Política, prevé que:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la Ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1340 de 2009, las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan el régimen de integraciones empresariales y se aplican respecto de *“todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico”.*

Que el artículo 4° de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009 prevé los supuestos que se deben tener en cuenta para dar cumplimiento al deber legal previsto en esta norma, al indicarse que:

“Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor, y que cumplan con las siguientes condiciones, estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada:

1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, o
2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Que según lo señalado en el párrafo 1° del artículo 4° de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio:

“Establecer los ingresos operacionales y los activos que se tendrán en cuenta según lo previsto en este artículo durante el año inmediatamente anterior a aquel en que la previsión se deba tener en cuenta y no podrá modificar esos valores durante el año en que se deberán aplicar”.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece como principios de la función administrativa, entre otros, el de eficacia, economía y celeridad, los cuales permiten que las actuaciones administrativas se adelanten de manera pronta y aseguren el cumplimiento de los fines del Estado.

Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, establece que, a partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente.

Que mediante la Resolución número 83304 del 22 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se establecieron los ingresos operacionales y los activos totales que se tendrían en cuenta para informar una operación de integración durante el año 2022.

Que mediante la Resolución número 001264 de 2022 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se fijó en cuarenta y dos mil cuatrocientos doce pesos (\$42.412) el valor de la UVT que regirá durante el año 2023.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, con la presente resolución se establecen los ingresos operacionales y los activos totales que se tendrán en cuenta para informar una operación de integración durante el año 2023.

RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar a partir del 1° de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, en un millón seiscientos cuarenta y un mil cuarenta y cuatro coma noventa y nueve unidades de valor tributario (1.641.044,99 UVT), los ingresos operacionales y los activos totales que se tendrán en cuenta para efectos de lo previsto en el artículo 4° de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009.

Artículo 2°. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 22 de diciembre de 2022.

El Superintendente de Industria y Comercio (e),

Juan Camilo Durán Téllez.

(C. F.).

Superintendencia de Sociedades

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1000-020185 DE 2022

(diciembre 23)

por medio de la cual se modifican unas funciones y se suprimen unos grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, en especial, las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y el artículo 8° del Decreto 1736 de 2020 modificado por el artículo 5° del Decreto 1381 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que la estructura de la Superintendencia de Sociedades se encuentra determinada por el artículo 6° del Decreto 1736 de 2020, modificado por el artículo 5° del Decreto 1381 de 2021.

Que dicho artículo fue desarrollado por medio de la Resolución 100-000040 del 8 de enero de 2021, en virtud de la cual se asignaron unas funciones y se definieron los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades.

Que de conformidad con las funciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades, mediante los Decretos Legislativos 560 de 2020 y 772 de 2020, se crearon unos grupos de trabajo y se asignaron unas funciones en la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia.

Que de acuerdo con las cifras publicadas en el Atlas de Insolvencia a junio de 2022, y verificado el Sistema de Información General de Sociedades (SIGS) de esta Entidad, se evidencia que los procesos de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, el trámite de Validación Judicial Expedito, el trámite de Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización en la ciudad de Bogotá, D. C. han venido disminuyendo de una forma exponencial, teniendo a su cargo 11 procesos en la actualidad. Por su parte, el Grupo de Procesos de Reorganización Ordinaria tiene a su cargo un número de procesos residual que se encuentran todos en la etapa final del proceso.

Que evidencia de lo anterior es que, a 30 de noviembre de 2020, el inventario de los procesos de los grupos antes citados era el siguiente:

TIPO PROCESO	INVENTARIO
Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización	8
Trámite de validación judicial	2
Trámite de validación expedito	1
Procesos de Reorganización Ordinaria	21

Que, en el marco de los principios de eficiencia y especialidad, y con miras a optimizar la administración de justicia y hacer eficiente las actividades de los grupos de trabajo adscritos a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, resulta conveniente y oportuno ajustar la estructura de la Delegatura.

Que, como consecuencia de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades,

RESUELVE:

Primero. Suprimir los siguientes grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia:

- Grupo de Validación y Confirmación de Acuerdos (NEAR).
- Grupo de Procesos de Reorganización Ordinarios.

Segundo. Modificar el Artículo 46 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero de 2021, el cual quedará en los siguientes términos:

Artículo 46. Grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia. Estarán adscritos a las Direcciones y al Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, los siguientes Grupos de Trabajo:

46.1 Grupos de Trabajo adscritos al Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia:

46.1.1 Grupo de Admisiones.

46.1.2 Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A.

46.2 Dirección de Procesos de Reorganización I

46.3 Dirección de Procesos de Reorganización II

46.3.1 Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada.

46.4 Dirección de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución

46.4.1 Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C.

46.5 Dirección de Procesos de Liquidación I

46.6 Dirección de Procesos de Liquidación II

46.6.1 Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada.

Tercero. Modificar el Artículo 48 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero de 2021, el cual quedará en los siguientes términos:

Artículo 48. Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A. El grupo de Procesos “de Reorganización y Liquidación A adscrito al Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, ejercerá las siguientes funciones:

48.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, Liquidación Judicial y Liquidación por Adjudicación, así como del trámite de la Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, el trámite de Validación Judicial Expedito, el trámite de Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización, previstos en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto Legislativo 560 de 2020 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, de deudores pertenecientes a la Categoría A, desde su inicio hasta su culminación.

48.2 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, Liquidación Judicial y Liquidación por Adjudicación, de deudores Categoría B y C cuando se encuentren coordinados con procesos de deudores Categoría A.

48.3 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a su cargo.

48.4 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a asuntos de su competencia.

48.5 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la justicia y administradores del deudor en relación con el proceso de insolvencia y decidir sobre las sanciones a que haya lugar.

48.6 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el estado del proceso.

48.7 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión Societaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumplimiento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo empresarial.

48.8 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desconocimiento del régimen de insolvencia.

48.9 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su competencia.

48.10 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corresponda a los procesos a su cargo, hasta su culminación.

48.11 Los ponentes del grupo tendrán facultades para conocer de procesos concursales a cargo de otros grupos por encargo que realice el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia respecto de procesos de deudores de cualquier categoría.

48.12 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, según los lineamientos y las políticas de la administración.

48.13 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

48.14 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia tendrá la facultad para asignar a este grupo procesos de otras categorías, en el evento en que los procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Cuarto. Modificar el Artículo 50 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero de 2021, el cual quedará en los siguientes términos: